**EL IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS.
LA DECLARACIÓN EN CEROS DE PAGO PROVISIONAL
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA EMPRESA QUEJOSA,
NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO
PARA IMPUGNAR LA LEY QUE LO ESTABLECE**

La empresa que se considera afectada por el impuesto especificado para acreditar su interés jurídico en el juicio de amparo, debe demostrar que se encuentra dentro de los supuestos de causación, es decir, su existencia legal, que realiza actividades empresariales y que cuenta con activos. Por tanto, la copia certificada de su declaración de pago provisional del Impuesto Sobre la Renta, en la cual todos los conceptos que en la misma se consignan aparecen en ceros, no es suficiente para demostrar los extremos apuntados, ya que con dicha documental la empresa quejosa no acredita realizar actividades empresariales y tener activos para encontrarse dentro de las hipótesis previstas por el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas y, consecuentemente, tener interés jurídico para promover el juicio de garantías.¹

¹ Amparo en revisión 1068/90. Fresca Mar, S.A. de C.V. 10 de junio de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Trinidad Lanz Cárdenas. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretaria: Graciela M. Landa Durán. Amparo en revisión 6136/90. Grupo Amaya del Caribe, S.A. de C.V. 26 de agosto de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Trinidad Lanz Cárdenas. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: María Guadalupe Rivera González. Amparo en revisión 1055/90. Inmobiliaria Fyd, S.A. y coagraviados. 2 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Trinidad Lanz Cárdenas. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Abraham Calderón. Amparo en revisión 1106/90. Trucha Inmobiliaria, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Trinidad Lanz Cárdenas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Miguel Ángel Castañeda. Amparo en revisión 4015/90. Casas y Despachos Cóndor. S.A. 27 de junio de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos Sempé Minvielle. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz. Tesis Jurisprudencial 23/94. Aprobada por la tercera sala de este alto tribunal, en sesión de siete de julio de 1994, por cinco votos de los señores ministros: presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Luis Gutiérrez Vidal y Diego Valadés (*Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, octava época, núm. 80, agosto de 1994, tesis 3a./J.23/94, pp. 21-22).

Comentario

En la jurisprudencia en cuestión, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontramos que la empresa que se considera afectada por el Impuesto al Activo no tiene demostrado su interés jurídico, es decir, la pretensión que intenta tutelar un derecho subjetivo mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional. Para Rodolfo Von Ihering, los derechos subjetivos son intereses jurídicamente protegidos y, por lo tanto, piensa que no tiene derecho el que puede querer, sino el que puede aprovechar.

De acuerdo con el texto jurisprudencial en análisis, el interés jurídico de la empresa quejosa no puede demostrarse mediante la presentación de la copia certificada de su declaración del Impuesto Sobre la Renta en ceros, ya que para ello debe acreditar que se encuentra dentro de los supuestos de causación, debiendo demostrar su existencia legal, que realiza actividades empresariales y que además cuenta con activos.

En el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Activo, encontramos el supuesto de causación para este impuesto, estableciendo el precepto mencionado que las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales residentes en México, están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Asimismo, establece la obligación del pago de dicho impuesto a las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados en el mismo precepto, únicamente por esos bienes. De lo anterior podemos deducir que efectivamente para ser considerado como sujeto obligado al pago del Impuesto al Activo de las Empresas, se debe cumplir con los requisitos de causación establecidos en la ley, siendo en este caso los ya apuntados y considerados por la Suprema Corte al determinar este criterio.

Podemos agregar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis jurisprudenciales en las cuales además de referirse a la declaración en ceros del Impuesto Sobre la Renta como elemento insuficiente para demostrar el interés jurídico de la empresa, también lo hace con relación a la escritura constitutiva de la sociedad quejosa, a la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa quejosa. De manera especial podemos mencionar que la tesis "Activo de las empresas, impuesto al. Extremos que debe probar una empresa para acreditar su interés jurídico para impugnar la ley que lo establece", además de establecer que la empresa quejosa para acreditar su interés jurídico, debe probar en primer lugar que se encuentra en el supuesto de causación previsto por el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; en segundo, que realiza actividades empresariales; y en tercero,

EL IMPUESTO AL ACTIVO DE LAS EMPRESAS

incluye el requisito de que debe demostrar que desde la entrada en vigor de dicho ordenamiento tiene activos por los que deberá pagar el impuesto. Considerando en particular este último requisito, se dejaría en indefensión a todas las empresas que adquirieran activos posteriormente a la entrada en vigor de la ley antes citada.

Consuelo MÉNDEZ RODRÍGUEZ